



**JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD CIRCUITO**

Medellín, siete (7) de abril de dos mil veintidós (2022)

**Medio de control:** NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL  
DERECHO

**Demandante:** ERICA YULIETH GUTIERREZ RAMÍREZ

**Demandado:** DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y OTRO

**Radicado:** 05001 33 33 001 2018 00172 00

**Asunto:** RESUELVE EXCEPCIÓN PREVIA - ORDENA  
NOTIFICAR la NACIÓN - MINISTERIO DE  
EDUCACIÓN NACIONAL

Encontrándose vencido el traslado de la demanda en el presente proceso y teniendo contestado dentro del término legal oportuno la demanda, se tiene que por parte del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA se observa que se propuso la excepción previa de falta de integración de litisconsorte conforme al numeral 9° art. 100 del C.G.P., ( 9. *No comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios.*) y con fundamento en el parágrafo del art. 175 del C.P se decidirá la excepción formulada.

La parte demandada argumentó la excepción previa presentada manifestando que por disposición legal la NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL es la máxima autoridad educativa, y es la encargada de regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación en todo el territorio nacional conforme al art 67 de la Constitución y ley 43 de 1975; así que las eventuales condenas que se llegaren a ordenar serán a cargo de la Nación en calidad de la prestación del servicio de educación y beneficiario de la labor contratada por el Departamento de Antioquia y la Institución Universitaria Pascual Bravo.

En cuanto a la falta de integración del litisconsorte necesario advierte el Despacho que el H. Consejo de Estado<sup>1</sup> se ha pronunciado pacíficamente sobre cuáles son los presupuestos que el Juez de lo Contencioso Administrativo debe tener en cuenta para aplicar el artículo 61 de la Ley 1564 de 2012, de lo cual se extracta:

*“(...)En atención a lo anterior, el litisconsorcio necesario se hace imprescindible cuando del contenido de la actuación administrativa demandada que se va a debatir, se advierte claramente que se debe citar de manera obligatoria a una persona más, a efecto de resolver de manera uniforme el litigio planteado, so pena que la omisión de la integración del litisconsorcio, conlleve una flagrante violación del derecho al debido proceso y desconocimiento de principios esenciales del ordenamiento constitucional, tales como la justicia, la vigencia de un orden justo, y la eficiencia y la eficacia de las decisiones*

<sup>1</sup> Consejo de Estado, Sección segunda, Subsección A, Radicación: 54001-23-33-000-2015-00026-(0716-16), 24 de octubre de 2018, CP: William Hernández Gómez.

<sup>2</sup> Sentencia T-056 de 6 de febrero de 1997. M P. Antonio Barrera Carbonell.

<sup>3</sup> Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, CP Sandra Lisset Ibarra Vélez, auto de 19 de mayo de 2018, radicado: 76001-23-33-000-2015-01426-01(2705-17)



judiciales<sup>2</sup>.

Frente al punto esta Sección<sup>3</sup> ha sostenido:

*« [...] En síntesis, el litisconsorcio se presenta cuando existe pluralidad de sujetos procesales que tienen una calidad común, esta es, la de demandantes o la de demandados; por su parte, el tipo de relación jurídico-sustancial que exista entre ellos y el tipo de correlación uniforme que se presenta con el objeto del proceso judicial, determina si la integración es necesaria o facultativa.*

*Así, cuando la cuestión litigiosa versa sobre una relación jurídica material, única e indivisible, que debe resolverse de manera uniforme para todos los sujetos que integran la parte correspondiente, se está frente a un litisconsorcio necesario, lo cual impone, por expreso mandato legal, su comparecencia obligatoria al proceso, por ser un requisito imprescindible para adelantarlos válidamente, pues cualquier decisión que se tome en su interior es uniforme y puede perjudicar o beneficiar a todos. (...)»*

Así las cosas, la integración del litisconsorcio necesario tiene su razón jurídica de ser, cuando en un proceso no están presentes todas las personas indispensables para fallar de fondo, cuando el juicio verse sobre relaciones o actos jurídicos respecto de los cuales, por su naturaleza o por disposición legal, no fuere posible resolver de mérito sin la comparecencia de todos (arts. 61 del C.G.P.).

En este sentido se observa que la cuestión litigiosa en el presente medio de control se centra en determinar si se configuró o no los elementos de un contrato laboral o contrato realidad y en caso afirmativo, se reconozcan los factores prestaciones adeudados, para el cargo de auxiliar administrativo secretaria; por lo que la figura del litisconsorte necesario debe ser aplicada respecto a la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO dado que el ART. 67 del Decreto 1278 de 2002 regula que: ***“Personal administrativo. El personal administrativo de los establecimientos educativos estatales se registrará por las normas que regulan la vinculación y administración del personal de carrera administrativa, conforme a lo dispuesto por la Ley 443 de 1998 y demás normas que la modifiquen, sustituyan y reglamenten. El régimen salarial y prestacional del personal administrativo de los establecimientos educativos estatales, con cargo a los recursos del Sistema General de Participaciones, será el dispuesto por las normas nacionales.”***

Ahora verificado el estado del proceso, se observa que la Nación - Ministerio de Educación Nacional con fundamento en el art. 67 de la Constitución Política y literal (a) de los numerales 2 y 3 del art. 148 ley 115 de 1994 ***“no se puede dejar de***

<sup>1</sup> Consejo de Estado, Sección segunda, Subsección A, Radicación: 54001-23-33-000-2015-00026-(0716-16), 24 de octubre de 2018, CP: William Hernández Gómez.

<sup>2</sup> Sentencia T-056 de 6 de febrero de 1997. M P. Antonio Barrera Carbonell.

<sup>3</sup> Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, CP Sandra Lisset Ibarra Vélez, auto de 19 de mayo de 2018, radicado: 76001-23-33-000-2015-01426-01(2705-17)



lado que, es la Nación -Ministerio Nacional de Educación, en cumplimiento de las funciones asignadas por la Ley, quien determina el valor de las transferencias a realizar a las Entidades del Orden Territorial, quien establece la políticas para el cumplimiento de los fines del Estado cuando en materia del Sistema General de Participaciones sector Educación se trata y cualquier decisión debe vincular u ordenar al Ministerio, para que haga las consideraciones necesarias para que estas erogaciones puedan ser reconocidas y pagadas por las Entidades Territoriales.”<sup>1</sup>

De manera que, en vista de lo analizado se tiene que recaería la obligación de la pretensión que se deprecia en la demanda, se procede a INTEGRAR el contradictorio y se ordenará la citación de la Nación - Ministerio de Educación Nacional conforme lo reglado en el inciso final del inciso 6° numeral 2” del art. 101 del C.G.P. para evitar la vulneración al debido proceso derecho de defensa y contradicción.

Reconocer personería a los abogados Adriana María Yepes Ospina C.C. 43.012.915 y T.P. 48.233 , Juan Felipe López Sierra C.C. 71.747.655 T.P. 105.527 y Yeimer Jolander Mazo Chavarria C.C.1.128.427.245 T.P. 294.740 , para que represente los intereses judiciales a la entidades Departamento de Antioquia, Seguros Generales Suramericana S.A. y la Institución Universitaria Pascual Bravo

Notificar la presente decisión por medio de los canales digitales informados por las partes, los cuales son:

[julianamuoz23@yahoo.es](mailto:julianamuoz23@yahoo.es);  
[notificacionesjudiciales@pascualbravo.edu.co](mailto:notificacionesjudiciales@pascualbravo.edu.co);  
[notificacionesjudiciales@antioquia.gov.co](mailto:notificacionesjudiciales@antioquia.gov.co);  
[jlopez@lba.legal](mailto:jlopez@lba.legal);

El expediente se puede ver en el siguiente enlace:

[https://etbcsj-my.sharepoint.com/personal/adm01med\\_cendoj\\_ramajudicial\\_gov\\_co/\\_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fadm01med%5Fcendoj%5Framajudicial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F050013333001%2F201800172](https://etbcsj-my.sharepoint.com/personal/adm01med_cendoj_ramajudicial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fadm01med%5Fcendoj%5Framajudicial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F050013333001%2F201800172)

DGR

Notificación por Estados electrónicos Fecha de publicación 18 de abril de 2022 Victoria Velásquez Secretaria
--

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

**OMAIRA ARBOLEDA RODRIGUEZ  
JUEZ**

**Firmado Por:**

<sup>1</sup> Archivo CONTESTACION DEMANDA DE LUZ MERY COSME página 15.

<sup>1</sup> Consejo de Estado, Sección segunda, Subsección A, Radicación: 54001-23-33-000-2015-00026-(0716-16), 24 de octubre de 2018, CP: William Hernández Gómez.

<sup>2</sup> Sentencia T-056 de 6 de febrero de 1997. M P. Antonio Barrera Carbonell.

<sup>3</sup> Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, CP Sandra Lisset Ibarra Vélez, auto de 19 de mayo de 2018, radicado: 76001-23-33-000-2015-01426-01(2705-17)

**Omaira Arboleda Rodriguez**  
**Juez Circuito**  
**Juzgado Administrativo**  
**001**  
**Medellin - Antioquia**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **b3eb0201963f50e465641826ac71f7d7e10244c627c47bff77f086fb27c3d109**  
Documento generado en 08/04/2022 05:03:50 PM

**Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:**  
**<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**